

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 1º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-7374-2022
CARATULADO : VILLABLANCA/FISCO DE CHILE - C.D.E

Santiago, veintinueve de Enero de dos mil veinticuatro

VISTO:

A folio 1, con fecha 25 de junio de 2022, comparece **PATRICIO ANTONIO VILLABLANCA PINTO**, empleado, reconocido como víctima en el Registro Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura bajo el N° 26.372, C.I. N° 7.129.572-9, con domicilio en Pasaje 6 N°6475, comuna de la Granja, quien confiere patrocinio y poder al abogado **Francisco Amigo Cartagena**, deduciendo demanda en juicio ordinario de indemnización de daños y perjuicios, en contra del **FISCO DE CHILE**, representado legalmente por **Ernestina Ruth Israel López**, en su calidad de Presidenta del **Consejo de Defensa del Estado**, ambos domiciliados en calle Agustinas N°1225, piso 2, comuna de Santiago, solicitando se le indemnice por los daños y perjuicios derivados de la detención, prisión política y torturas, y se condene al demandado a la reparación y pago de la cantidad de



Foja: 1

\$250.000.000.- por daño moral o las cantidades que en derecho se determine, con los reajustes e intereses correspondientes, más costas.

Relata que, a sus 27 años y por causa de su actividad como dirigente social en contra de la dictadura, el 27 de noviembre de 1984 fue detenido por carabineros en la vía pública, quienes los trasladaron a la tenencia La Castrina, donde recibió malos tratos, golpes y amenazas. Luego fue trasladado a la 1° Comisaría de Santiago, donde se incrementaron los malos tratos y fue interrogado por la CNI. Fue desnudado, permaneció amarrado por horas, recibió una golpiza y se le aplicó electricidad en pies, manos, pene y testículos, hasta desvanecerse, ocasiones en que era despertado a puntapiés. Sufrió fractura y hundimiento de costillas. Se le proporcionaban alimentos con hongos y agua sucia. Pese a todo, no proporcionó información. Se le obligó con golpes a mantenerse en estado de vigilia, y se le amenazó de muerte y con daño a sus familiares si interponía denuncias.

El 01 de diciembre de 1984 fue relegado a la localidad de Salamanca por dos meses y medio, donde no conocía a nadie, y donde experimentó el rechazo



Foja: 1

social, pues la gente temía involucrarse con él. Una vez que regresó a su sector fue objeto de seguimiento y amenazas.

El 17 de julio de 1986 fue detenido e interrogado por 12 horas, junto con unos amigos.

El 07 de octubre de 1986, un mes tras el atentado contra Pinochet, fue detenido por funcionarios de la CNI en la casa de una amiga. Fue golpeado y amenazado con un arma, y se le trasladó al cuartel Borgoño, donde fue golpeado salvajemente. Se le sometió a extensos interrogatorios bajo tortura con golpes y electricidad, en la creencia de que estaba involucrado en el atentado. Se le proporciono agua con drogas, y debía hacer sus necesidades en un rincón de la celda.

Se refugió en Argentina entre diciembre de 1988 y 1990.

Agrega que su proceso de duelo sigue vigente, que no ha podido cerrar la herida, sufre falencias en su salud física y psíquica, estados depresivos, continuas pesadillas, y se ha vuelto una persona solitaria, poco comunicativa, depresiva y asustadiza. Su grupo familiar y sus amigos cercanos fueron rechazados por sociedad de la época, incluso



Foja: 1

por sus vecinos. Hasta la actualidad sufre dolores óseos, sangró mucho tiempo por las torturas y la aplicación de corriente en sus genitales, hasta cuando está en reposo sus huesos *parecen quebrarse*, el frío intensifica el dolor y su dentadura está soltándose.

Invoca, como fundamentos de derecho de su pretensión, la teoría de la responsabilidad de derecho público o constitucional del estado, que pretende por sobre todo dejar sin efecto la impunidad para los actos del Estado que lesionan los derechos fundamentales de las personas, la que se funda no en las normas que se refieren a simples delitos civiles, sino en sino en las normas que regulan la conformación y actuación de los poderes públicos: esto es, la Constitución, de la que cita los artículos 6, 7 y 38. De los dos primeros preceptos desprende que los actos del estado que infrinjan la juridicidad generan responsabilidad, e invoca los artículos 4 y 5 del texto constitucional, y sostiene que el estado se construye como un garante de respeto de los derechos y garantías establecidas a favor de la persona humana.



Foja: 1

Sostiene a continuación que la responsabilidad constitucional del estado por crímenes en contra de la humanidad es imprescriptible, lo que funda en que i) se trata de un estatuto diverso al contractual o al extracontractual, ii) la existencia de un principio de derecho internacional especial contenido en el artículo de la Corte Penal Internacional, iii) en la seguridad jurídica, iv) en el principio de coherencia entre la acción civil y la penal, v) en el enfoque centrado en las víctimas y en la humanidad, vi) en el fin preventivo de la persecución de los crímenes de lesa humanidad y vi) en el principio de la reparación integral.

Respecto del hecho de atribución, afirma que se trata de responsabilidad objetiva, que requiere i) existencia del daño o lesión y ii) actividad del órgano en ejercicio de sus funciones.

Sostiene que se pide la reparación de daño moral, que, tratándose de la víctima directa, los tribunales han entendido que existe por la sola ocurrencia del ilícito.

Para efectos de la fijación del quantum indemnizatorio, pide considerar i) la gravedad del



Foja: 1

suceso, ii) la naturaleza del derecho cercenado, y
iii) las consecuencias que derivan del daño.

Afirma que los actos cometidos por el estado tienen carácter terrorista, y que no existe duda respecto de la causalidad.

A folio 7, rola notificación de la demanda, practicada el 11 de enero de 2023.

A folio 10, comparece Carolina Vásquez Rojas, abogada en representación del Fisco de Chile, quien contestó la demanda, solicitando su rechazo con costas.

Como primera defensa opuso la excepción de reparación integral, sosteniendo que resulta improcedente la indemnización alegada por haber sido reparado el demandante, principalmente a través de tres tipos de compensaciones, (a) reparación mediante transferencias directas de dinero, (b) reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas, y (c) reparaciones simbólicas.

Hace hincapié que en la especie, el actor ha percibido beneficios pecuniarios al amparo de la Ley N°19.992 y sus modificaciones, sobre prisioneros y



Foja: 1

torturados políticos; estableciéndose una pensión anual reajutable de \$1.353.798 para beneficiarios menores de 70 años; de \$ 1.480.284 para beneficiarios de 70 o más años de edad y de \$ 1.549.422, para beneficiarios mayores de 75 años de edad, a favor de las personas afectadas por violaciones de derechos humanos individualizados en el anexo "Listado de Prisioneros Políticos y Torturados" de la nómina de personas reconocidas como víctimas. Adicionalmente, el actor recibió Aporte Único de Reparación Ley 20.874, por \$1.000.000.

Agrega que a los beneficiarios, tanto de la Ley 19.234 como de la Ley 19.992, les fue concedido el derecho a gratuidad en las prestaciones médicas otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) en servicios de salud del país, agregando que también se les otorgaron beneficios educacionales, consistentes en la continuidad gratuita de estudios básicos, medios o superiores, a través de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación; y asimismo, beneficios en vivienda; de lo que resulta concluir que los referidos mecanismos de reparación han compensado precisamente aquellos daños, no pudiendo



Foja: 1

ser, entonces, reparados nuevamente; citando jurisprudencia relativa a tal situación.

En subsidio, opuso la excepción de prescripción extintiva de 4 años con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil, en relación con lo dispuesto en el artículo 2497 del mismo Código, puesto que de acuerdo con el relato fáctico de la demandante, la privación de libertad y torturas ocurrió entre el día 16 de septiembre de 1973 y el 11 de diciembre del mismo año. En efecto aun cuando se considerase que la prescripción estuvo suspendida durante el período de la dictadura militar, a la fecha de notificación de la demanda de autos, esto es, el **27 de abril de 2023**, igualmente ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2.332. En subsidio, alegó la prescripción extintiva de 5 años contemplada en el artículo 2.515, en relación con el artículo 2.514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la anotada fecha de notificación de la acción civil, transcurrió con creces el plazo que establece el citado artículo 2.515 del Código Civil.



Foja: 1

Añade que los tratados internacionales que rigen en esta materia, no establecen de manea explícita la imprescriptibilidad en materia indemnizatoria civil, por lo que no existiendo una norma especial debe recurrirse al derecho común; pues cualquiera sea el origen o naturaleza de la indemnización de perjuicios, su contenido es netamente patrimonial.

Destaca que Chile, al ratificar la Convención Americana de Derechos Humanos como la Corte Interamericana, formuló una reserva en orden a que el reconocimiento de la competencia tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se refiere a hechos posteriores a la fecha del depósito del instrumento de ratificación, esto es, el 21 de agosto de 1990, o, en todo caso, a hechos cuyo principio de ejecución sea posterior al 11 de marzo de 1990.

En subsidio, sostiene que la regulación del daño moral debe considerar los pagos ya recibidos del Estado y guardar armonía con los montos establecidos por los Tribunales. Por último, expresa



Foja: 1

su posición sobre la improcedencia del cobro de reajustes e intereses.

A folio 14, la parte demandante evacuó el trámite de la réplica, controvirtiendo las excepciones y/o defensas formuladas por el Fisco de Chile.

A folio 16, la demandada evacúa la dúplica reiterando su argumentación anterior y añadiendo citas jurisprudenciales.

A folio 21 se recibió la causa a prueba.

A folio 39 se citó a las partes a oír sentencia, por resolución que se encuentra firme.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, como se dijo, comparece **PATRICIO ANTONIO VILLABLANCA**, deduciendo demanda en juicio ordinario de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual, en contra del **FISCO DE CHILE**, con la cual pretende se acoja la demanda, por haber sido sometido a detención, prisión ilegal, torturas y apremios ilegítimos, y se condene al demandado a la reparación y pago de la cantidad de **\$250.000.-** por daño moral o las



Foja: 1

cantidades que en derecho se determine, con los reajustes e intereses correspondientes, más costas.

Funda su pretensión en los argumentos ya explicitados en la expositiva, que por economía procesal, se tienen por reproducidos para todo efecto legal.

SEGUNDO: Que, notificado el demanda, contestó la demanda y se evacuaron los trámites de réplica y dúplica, conforme las alegaciones y defensas debidamente reseñadas en la expositiva, que por economía procesal, se tienen por reproducidos para todo efecto legal.

TERCERO: Que, a objeto de acreditar sus alegaciones, la parte demandante se valió de los siguientes medios probatorios:

Instrumental:

A folio 1:

1. Copias de sentencias de primera y segunda instancia dictadas en autos C-14885-2019, del 9° Juzgado Civil de Santiago, C-2368-2020, del 29° Juzgado Civil de Santiago, y C-1112-2019, del 27° Juzgado Civil de Santiago.



Foja: 1

2. Copia de presentación realizada por el psicólogo Freddy Silva G, Coordinador del Equipo PRAIS, denominada Características del daño y trauma en afectados directos de violaciones a los Derechos Humanos.

3. Copia de conferencia Internacional denominada Consecuencias de la Tortura en la Salud de la Población Chilena, del Ministerio de Salud de Chile.

4. Copia de informes denominado *La Tortura. Modelo de Intervención y La Tortura*. Un Problema Médico, elaborados por el equipo de salud mental de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC).

5. Copia de extracto de Norma Técnica del Ministerio de Salud de Chile, para la atención en Salud de Personas Afectadas por la Represión Política Ejercida por el Estado en el Periodo 1973-1990.

6. Artículo denominado Represión Política, Daño Transgeneracional y el Rol del Estado como Agente Reparador, escrito por el Psicólogo Clínico del programa PRAIS Sergio Beltrán.



Foja: 1

7. Copia de presentación realizada por el psicólogo Freddy Silva G, Coordinador del Equipo PRAIS, denominada Transgeneracionalidad del daño.

A folio 24:

8. Extractos del Capítulo VIII del Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura (VALECH).

A folio 25:

9. Extracto del Capítulo III del Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura (VALECH).

A folio 27:

10. Copia de nómina de personas reconocidas como víctimas por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, en cuya página 767 se registra la calidad de torturado de Patricio Antonio Villablanca Pinto, cédula nacional de identidad número 7.129.572-9, Registro de Torturados **N° 26372**.

A folio 29:

11. Extractos del Capítulo V del Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura (VALECH).



A folio 33:

12. Copia de Carpeta de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura Valech, correspondiente al demandante y portada principal de expediente ante INDH.

13. Ficha de ingreso de preso político y/o torturado del actor.

14. Ficha de datos de primera detención del actor.

15. Ficha de antecedentes de tortura de la primera detención.

16. Copia de cédula de identidad del actor. Ante el INDH.

17. Copia de declaración jurada notarial del actor, de fecha 18 de julio de 1986.

18. Copia de certificado suscrito por Silvana Poblete Romero, secretaria de Organización Comunal La Granja.

19. Certificado emitido por la Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad en el cual se deja constancia de las detenciones y relegación del demandante.



Foja: 1

20. Carta suscrita por Cristian Troncoso Salazar, Presidente Comunal y Silvana Poblete Romero, Secretaria de Organización, ambos del Partido Socialista de Chile, al demandante, de fecha 15 de octubre de 2003.

21. Notificación del Ministerio del Interior, delegación Mendoza, al demandante, que comunica que Argentina acepta su petición de refugio.

22. Carta de Manuel Barrera Romero, secretario ejecutivo de WUS - Chile al actor, de fecha 23 de mayo de 1990.

23. Escrito presentado por el actor a la Iltma. Corte de Apelaciones de Presidente Aguirre Cerda, con fecha 07 de octubre de 1986.

24. Copia de recurso de amparo interpuesto a favor del actor.

25. 02 recortes de prensa.

26. Declaración realizada por la Mesa Social y Política de la Granja.

27. Declaración denominada *Para que nadie pierda la memoria...*



Foja: 1

28. Comprobante de Ingreso de Antecedentes a la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura, Código de Recepción 0613000237.

A folio 35:

1. Copia Norma Técnica para la atención en salud de personas afectas por la represión política ejercida por el estado en el período 1973-1990.

2. Copia de Resolución Exenta N°437 de 2006, de la Subsecretaría de Salud Pública.

3. Informe Psicológico de Daño a consecuencia de detención política, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes del demandante don Patricio Antonio Villablanca Pinto emitido por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud y Derechos Humanos (PRAIS), suscrito en enero de 2022 por el psicólogo Cristián Vilches Guerra.

CUARTO: Que, el demandado solo rinde como probanza oficio respuesta del Instituto de Previsión Social **ORD.: DSGT N° 4792-12195**, rolante a **folio 18**, que da cuenta que el demandante ha recibido, a marzo de 2023, la cantidad \$34.414.788.- por concepto de Pensión Ley 19.992, \$1.000.000.- por Aporte Único Ley 20.874, y \$609.685.- por concepto de aguinaldos,



Foja: 1

lo que totaliza **\$36.024.473**. Su pensión actual es de \$230.025.-.

QUINTO: Que, son hechos de la causa, por no haber sido objeto de controversia, que se encuentran además acreditados con el mérito del documento reseñado en el motivo anterior, los siguientes:

1. Que el actor tiene la calidad de "Víctima de Prisión Política y Tortura", conforme al Informe Valech, con el **N°26.372**;

2. Que al mes de marzo de 2023, el actor ha recibido la cantidad la cantidad \$34.414.788.- por concepto de Pensión Ley 19.992, \$1.000.000.- por Aporte Único Ley 20.874, y \$609.685.- por concepto de aguinaldos, lo que totaliza **\$36.024.473**. Su pensión actual es de \$230.025.-.

SEXTO: Que, resulta necesario y oportuno dejar consignado que el 11 de Noviembre de 2003, transcurridos 13 años desde que se restableció el Estado de Derecho en nuestro país, durante el gobierno del Ex Presidente, S.E Ricardo Lagos Escobar, se dictó el Decreto N° 1040, mediante el cual se creó la "Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, para el Esclarecimiento de la Verdad acerca de las Violaciones de Derechos Humanos



Foja: 1

en Chile", cuyo objetivo, de acuerdo a las palabras del propio gestor, fue determinar el universo de las personas que sufrieron privación de libertad y torturas por razones políticas, entre Septiembre de 1973 y Marzo de 1990; que se materializó en un Informe que consta de más de 500 páginas, elaborado con 28.000 testimonios considerados válidos (se recibió testimonio de 35.865 personas, residentes en Chile como en el extranjero); de los que, con la debida prudencia y cautela, se dejó constancia en el mismo informe, sin individualizar nombres ni algún otro dato personal, sino únicamente el sexo del declarante, y el lugar en que fue detenido.

Conjuntamente con el informe, la Comisión elaboró un listado con los nombres de las personas a quienes se les reconoció la calidad de Presos Políticos y Torturados, con un total de **27.153** personas.

SEPTIMO: Que, posteriormente, y con ocasión del resultado de la labor de la Comisión, fue dictada la Ley N° 19.992, publicada con fecha 24 de Diciembre de 2004, que "Establece Pensión de Reparación y Otorga otros Beneficios a Favor de las Personas que indica", cuyo artículo primero,



Foja: 1

contenido en el Título I "De la pensión de reparación y bono", dispone: *"Establécese una pensión anual de reparación en beneficio de las víctimas directamente afectadas por violaciones a los derechos humanos individualizadas en el anexo "Listado de Prisioneros Políticos y Torturados", de la Nómina de personas reconocidas como Víctimas, que forma parte del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, creada por el decreto supremo N° 1.040, de 2003, del Ministerio del Interior."*

El artículo segundo, establece que la pensión anual aludida, ascendería a \$1.353.798.- para aquellos beneficiarios menores de 70 años de edad; a \$1.480.284.- para aquellos beneficiarios mayores de 70 o más años pero menores de 75 años; y a \$ 1.549.422.- para aquellos beneficiarios de 75 o más años de edad; pensión que se pagaría en 12 cuotas mensuales de igual monto, reajutable conforme lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto Ley N° 2.448, de 1979, o en las normas legales que reemplacen dicha disposición.

Su inciso segundo, establece que la pensión referida, sería incompatible con aquellas otorgadas



Foja: 1

en las leyes números 19.234, 19.582 y 19.881, pudiendo quiénes se encuentren en tal situación optar por uno de estos beneficios en la forma que determine el Reglamento; precisando que las personas que ejercieran dicha opción, tendrían derecho a un bono de \$ 3.000.000.-, el que se pagaría por una sola vez dentro del mes subsiguiente de ejercida la opción.

El artículo séptimo, dispone que tanto la pensión como el bono se devengarán a partir del primer día del mes subsiguiente a la fecha en que los beneficiarios presenten sus solicitudes, mismas que podrían impetrarse desde la publicación de la misma ley.

OCTAVO: Que, por otro lado, mediante la Ley N° 20.874, publicada con fecha 29 de Octubre de 2015, que "Otorga un aporte único, de carácter reparatorio, a las víctimas de prisión política y tortura, reconocidas por el Estado de Chile", de acuerdo a su artículo primero, se otorgó un aporte único en carácter de reparación parcial, de \$1.000.000.-, a los titulares individualizados en la Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión



Foja: 1

Política y Tortura, y a los titulares incluidos en la nómina de víctimas de prisión política y tortura elaborada por la Comisión asesora para la calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y víctimas de Prisión Política y Tortura, conforme a las leyes N° 19.992 y N° 20.405, respectivamente.

El inciso tercero, dispone que: *"Con todo, el aporte a que se refiere este artículo será imputable al monto que, en su caso, se otorgue por concepto de reparación pecuniaria a cada víctima de prisión política y tortura."*

NOVENO: Que, en cuanto al demandante PATRICIO ANTONIO VILLABLANCA PINTO, cédula de identidad 7.129.572-9, detenta la calidad de "Prisionero Político y Torturado", constando en autos que ha percibido, en tal calidad, las sumas señaladas en el motivo quinto de este fallo, lo que lleva a establecer que el actor ha sido y es beneficiario de la Leyes 19.992 y 20.874.

DECIMO: Asentado lo anterior, toca referirse a las defensas del Fisco, primeramente alegó la excepción de reparación integral o satisfactiva, fundada, como ya se explicitará, en que el actor ha



Foja: 1

sido indemnizado, en razón de haber recibido, entre otros, beneficios pecuniarios al amparo de la Ley N° 19.992 y 20.874; resultando en consecuencia improcedente ser indemnizados por daños cuya génesis radica en los mismos hechos.

Al respecto, es necesario señalar que tal como lo sostuvo la jurisprudencia la Comisión Valech no pretendió, en estricto rigor, efectuar una "transacción" con cada uno de los beneficiados, para así precaver la interposición de una acción como la del caso de autos; cuestión que no aparece del tenor literal de la ley, ni tampoco de su espíritu, toda vez que en ella se establece que la pensión sería incompatible con aquellas otorgadas en las leyes números 19.234, 19.582 y 19.881, pudiendo quienes se encontraren en tal situación optar por uno de dichos beneficios en la forma que determine el Reglamento; situación de la que resulta entonces concluir que, no obstante ser el actor beneficiario de la pensión otorgada por el Estado, en su condición de "prisionero político torturado", tal hecho no es óbice para que el afectado interpusiera la acción indemnizatoria del caso de autos.



Foja: 1

Por lo demás, la situación que afectó al demandante está dentro de lo que la teoría del derecho de daños estima procedente, en orden a reparar el daño causado y nada más que el daño, centrando la función primordial de la reparación en la víctima. Así, si el Estado es culpable por los atentados a la dignidad humana, la responsabilidad civil se concretiza en la teoría de daños, cuya función esencial es su reparación, efecto que a su vez se radica en el patrimonio del Estado quien tiene el deber de repararlo, entre otras formas, por indemnizaciones pecuniarias.

En tal sentido, está acreditado que el demandante fue sometido a detenciones ilegales, durante las cuales fue brutalmente torturado tanto física como psicológicamente por sus captores. Por consiguiente, el daño que reclama se enmarca en el daño moral y la indemnización por ese daño es una manera de abordar la reparación, pues no se pueden borrar los hechos, y se configura la obligación de otorgar una indemnización pecuniaria que compense el daño causado que no ha sido íntegramente reparado, por lo que la excepción de pago y/o reparación integral opuesta por el Fisco no podrá prosperar.



Foja: 1

UNDECIMO: Que, el Fisco también opuso la excepción de prescripción de la acción indemnizatoria, fundada en los argumentos explicitados con anterioridad en el presente fallo.

Al respecto sólo caber tener especialmente presente que del tenor literal del Artículo 5° de nuestra Carta Fundamental, fluye que el ejercicio de la soberanía se realiza por el pueblo a través del plebiscito y también, se realiza por las autoridades que la misma Constitución establece; y que dicho ejercicio, reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana; y es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por la Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Por consiguiente, a través de dicha disposición constitucional, se incorporan al derecho nacional las obligaciones contempladas en los instrumentos internacionales, entre las que destaca el deber de indemnizar o reparar íntegramente los daños cometidos por violaciones de los derechos humanos; adquiriendo rango constitucional.



Foja: 1

Al respecto la Excm. Corte Suprema, en los autos Rol **22.856-2015**, de fecha 29 de Diciembre de 2015, ha señalado al respecto que, "tratándose de un delito de lesa humanidad -lo que ha sido declarado en la especie-, cuya acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la correlativa acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción contempladas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional, en armonía con el inciso segundo del artículo 5° de la Carta Fundamental, que instaure el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de todos los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito, e incluso por el propio derecho interno, que, en virtud de la ley N° 19.123, reconoció en forma explícita la innegable existencia de los daños y concedió también a los familiares de aquellos calificados como detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, por violación a los derechos humanos en el período 1973-1990, regalías de carácter económico o pecuniario. En esta línea discurren también SCS Nros. 20.288-14, de 13



Foja: 1

de abril de 2105; 1.424, de 1 de abril de 2014; 22.652, de 31 de marzo de 2015, entre otras.

Por ende, cualquier pretendida diferenciación en orden a dividir ambas acciones y otorgarles un tratamiento desigual resulta discriminatoria y no permite al ordenamiento jurídico guardar la coherencia y unidad indispensables en un Estado de derecho democrático. Entonces, pretender el empleo de las disposiciones del Código Civil en la responsabilidad derivada de crímenes de lesa humanidad posibles de cometer con la activa colaboración del Estado, como derecho común supletorio a todo el régimen jurídico, hoy resulta improcedente.

Por lo demás, la reparación integral del menoscabo no se discute en el plano internacional, ni se circunscribe a los autores de los crímenes exclusivamente, sino también se prolonga hacia el mismo Estado. La preceptiva internacional no ha creado un sistema de responsabilidad, lo ha reconocido, desde que, sin duda, siempre ha existido, con evolución de las herramientas destinadas a hacer más expedita, simple y eficaz su



Foja: 1

declaración, en atención a la naturaleza de la violación y del derecho violentado."

En conclusión, según lo expresado precedentemente, las excepciones de prescripción principal y subsidiaria serán desestimadas, por encontrar ambas su fundamento en normas de derecho interno, preceptos que, como ha quedado claramente explicitado en el presente fallo, no son aplicables al caso de autos.

El argumento anterior, además ha sido reiterado recientemente en un fallo que señala en su considerando "...**Octavo:** *Que, en suma, pesando sobre el Estado la obligación de reparar a las víctimas y sus familiares consagrado por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, el derecho interno no deviene en un argumento sostenible para eximirlo de su cumplimiento. No sólo por lo ya expresado sino porque este deber del Estado también encuentra su consagración en el derecho interno. En efecto, el sistema de responsabilidad del Estado deriva además del artículo 3° de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que dispone que la Administración del Estado está al servicio de la*



Foja: 1

persona humana, que su finalidad es promover el bien común, y que uno de los principios a que debe sujetar su acción es el de responsabilidad; y, consecuentemente con ello, en su artículo 4° dispone que "el Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado". "Así, no cabe sino concluir que el daño moral causado por la conducta ilícita de los funcionarios o agentes del Estado autores de los ilícitos de lesa humanidad en que se funda la presente acción, debe ser indemnizado por el Estado". C.S Rol N° 130.949-2020.

DUODECIMO: Que, habiéndose desestimado las excepciones de reparación integral y de prescripción de la acción civil, toca pronunciarse sobre la procedencia de la indemnización pretendida.

Como se ha venido expresando, se encuentra acreditado que el actor PATRICIO ANTONIO VILLABLANCA PINTO, detenta la calidad de "Prisionero Político y Torturado", por lo que es del todo plausible sostener que las detenciones y vejámenes que sufrió, que los actos ejercidos por agentes del estado en su



Foja: 1

persona, debieron necesariamente afectar su estado físico y emocional, de manera inmediata y durante todo el período que estuvo detenido, como también en los tiempos futuros.

Asimismo, con el mérito del informe particular de daños psicológicos, elaborado por el equipo de PRAIS acompañado a folio 35, en armonía con los antecedentes contenidos en la carpeta digitalizada del expediente Comisión VALECH, otorgado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, unido a los hechos acreditados en la causa, es posible establecer una presunción grave, precisa y concordante en cuanto a que una persona que ha sido violentada física y psicológicamente por agentes del Estado, como en el caso del demandante PATRICIO ANTONIO VILLABLANCA PINTO, sufrió daños físicos y emocionales cuyas secuelas son permanentes y deben ser reparadas, por cuanto es deber del Estado respetar y promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana como son la integridad física y psíquica, no siendo tolerable bajo ningún respecto que sus agentes hayan lesionado los derechos fundamentales del demandante, por lo que el Estado debe responder.



Foja: 1

DECIMO TERCERO: Así las cosas, el daño experimentado por el actor sólo se puede enmarcar dentro de aquél denominado "moral", por lo que resulta plausible entonces acoger la demanda, y tal circunstancia conlleva a determinar los perjuicios que las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos sufrieron en el régimen militar.

Ello es una cuestión de ponderación y valoración que se le impone al tribunal, con el objeto de establecer y precisar los daños, la aflicción y el dolor, mismos que no sólo son posibles de presumir fundadamente, sino también por el principio de normalidad, que indica que cualquier persona que es o ha sido objeto de apremios ilegítimos y tortura por agentes del Estado sufre un daño que debe ser reparado.

En esta labor de determinación del quantum indemnizatorio, este sentenciador considera como aspectos relevantes las siguientes circunstancias:

(a) que el demandante detenta la calidad de "Prisionero Político y Torturado", y en tal condición fue sometido a detenciones ilegales, en la cual fue brutalmente torturado por agentes del Estado quienes lesionaron sus derechos fundamentales



Foja: 1

a la integridad física y psíquica; y **(b)** las indemnizaciones fijadas por los tribunales superiores de justicia en circunstancias análogas.

DECIMO CUARTO: Sin perjuicio de lo anterior y de que, además, se viene desestimando la excepción de reparación integral y/o satisfactoria, este sentenciador es del parecer de considerar en la indemnización final, los montos percibidos por el demandante al amparo de las Leyes 19.992 y 20.874, por concepto de pensiones, aporte único y aguinaldos, teniendo para ello la naturaleza de las pensiones otorgadas por el Estado en este tipo de materias.

En efecto, el hecho dañoso que motivó la dictación de las leyes de reparación, a saber ley 19.992 y ley 20. 874, entre otras, fue el hecho ilícito del actuar de los agentes del Estado hacia víctimas que sufrieron persecución política, según quedó así recogido en el Informe Valech. Enseguida, debe tenerse especial atención que el hecho ilícito es la causa adecuada del beneficio y del daño, es decir, que tanto el beneficio como el daño provienen del mismo hecho ilícito.



Foja: 1

En este aspecto, las leyes de reparación fueron una reacción positiva del Estado tendientes a lograr intentar reparar el daño causado, lo que en ningún caso inhibe o coarta el derecho a que las personas que se sienten perjudicadas o insatisfechas accionen y soliciten la reparación integral de su daño.

A mayor abundamiento, tanto las leyes dictadas al efecto como las indemnizaciones otorgadas por los tribunales cumplen una función reparadora de daños, que emana de la misma naturaleza, cual es el daño moral, siendo ambas compatibles y complementarias.

Así las cosas, la regla de la *Compensatio lucri cum damno* es un principio de imputación de daños, dentro de la teoría del derecho de daños y la reparación integral, por lo que emanando el mismo daño del actuar ilícito de los agentes del Estado, teniendo además la misma naturaleza cual es la reparación del daño moral por ser víctimas de la Responsabilidad del Estado, el monto ya referido y otorgado estos años debe ser considerado en la suma final a recibir por parte de las víctimas, tal como



Foja: 1

en el mismo sentido resolvió la Corte de Apelaciones de esta ciudad en el Ingreso Corte 1763-2020.

DÉCIMO QUINTO: Que por otro lado considerar el monto que han recibido la demandante no significa descartar la premisa fundamental de que todo daño debe ser íntegramente reparado. Citando al profesor Llamas Pombo *"difícil es ponderar la correcta valoración del sufrimiento, la pena, angustia, las vivencias desagradables e incluso el trauma psíquico, más aún traducir a una categoría diferente la de la reparación económica de los daños morales y ello queda en definitiva a la prudencia de los tribunales, dentro de los límites de las pretensiones resarcitivas producidas en la causa"* (Eugenio Llamas Pombo. "Las formas de prevenir y reparar el daño". Wolters Kluwer, España 2020, pág.203.)

Por su parte, en la doctrina nacional, la profesora Domínguez Hidalgo refiere que la forma predilecta y más eficiente de tutela personal es la acción indemnizatoria. En la especie, la *acción de responsabilidad civil alcanza esa eficiencia porque es la única acción civil que se funda precisamente solo en la condición de persona. Siguiendo a López*



Foja: 1

Jacoste, la responsabilidad civil se ha constituido en una garantía genérica de plenitud personal (Carmen Domínguez Hidalgo. "El Principio de reparación integral en sus contornos actuales", Thomson Reuters, año 2019, pág. 87)

En consecuencia, es perfectamente posible la compatibilidad entre los beneficios pecuniarios otorgados por las leyes de reparación con las indemnizaciones que otorga el poder judicial, y no se inhibe conceder un monto por el daño extrapatrimonial por todo aquello que se estime que no ha sido reparado. Se cumple así el principio de reparación integral del daño, cuyo reconocimiento en la doctrina es aceptada como la función primordial del derecho de daños y que permite además, dar fuerza a los argumentos propios de la responsabilidad civil.

Conviene destacar que la Ley 19.992 en su mensaje destaca que *"la prisión política y las torturas constituyeron una práctica institucional del Estado que es absolutamente inaceptable y ajena a la tradición histórica de Chile"*. Eso hizo necesario la dictación de la ley en reconocimiento a aquellas víctimas y debe el Estado *"entregar una*



Foja: 1

compensación que, aunque sea austera, es una forma de reconocer su responsabilidad en lo ocurrido".

DÉCIMO SEXTO: Considerando todos los aspectos precedentemente expuestos, se fijará la indemnización de perjuicios, por daño moral, que deberá pagar el Estado al demandante, en su calidad de víctima de violación a sus derechos fundamentales en la suma única y total de **\$ 100.000.000 (cien millones de pesos)**, la que se estima justa y equitativa, considerando que el actor es beneficiario de las leyes de reparación respectivas ya indicadas.

El monto indemnizatorio fijado, deberá pagarse debidamente reajustado desde que la sentencia se encuentre ejecutoriada; más los intereses corrientes para operaciones de crédito de dinero no reajustables desde que el Fisco incurra en mora, esto es, desde la notificación del cumplimiento incidental.

Por estas consideraciones, y visto además, lo dispuesto en los artículos 144, 160, 170, 254, 748 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; el Decreto 1040, de 26 de Septiembre de 2003, la Ley 19.992 y la Ley 20.874;



SE DECLARA:

1.- Que **se rechazan** las excepciones opuestas por el demandado;

2.- Que **se acoge** la demanda intentada **a folio 1**, y se condena al Fisco de Chile a pagar al actor, **PATRICIO ANTONIO VILLABLANCA PINTO**, la cantidad de \$ **100.000.000** en la forma señalada en el motivo final.

3.- Que no se condena en costas al demandado.

Regístrese y notifíquese, y elévese en consulta si no se apelare.

Dictada por don Wilson Rodríguez Rodríguez, Juez Suplente del Primer Juzgado Civil de Santiago.

rfu

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, veintinueve de Enero de dos mil veinticuatro**



